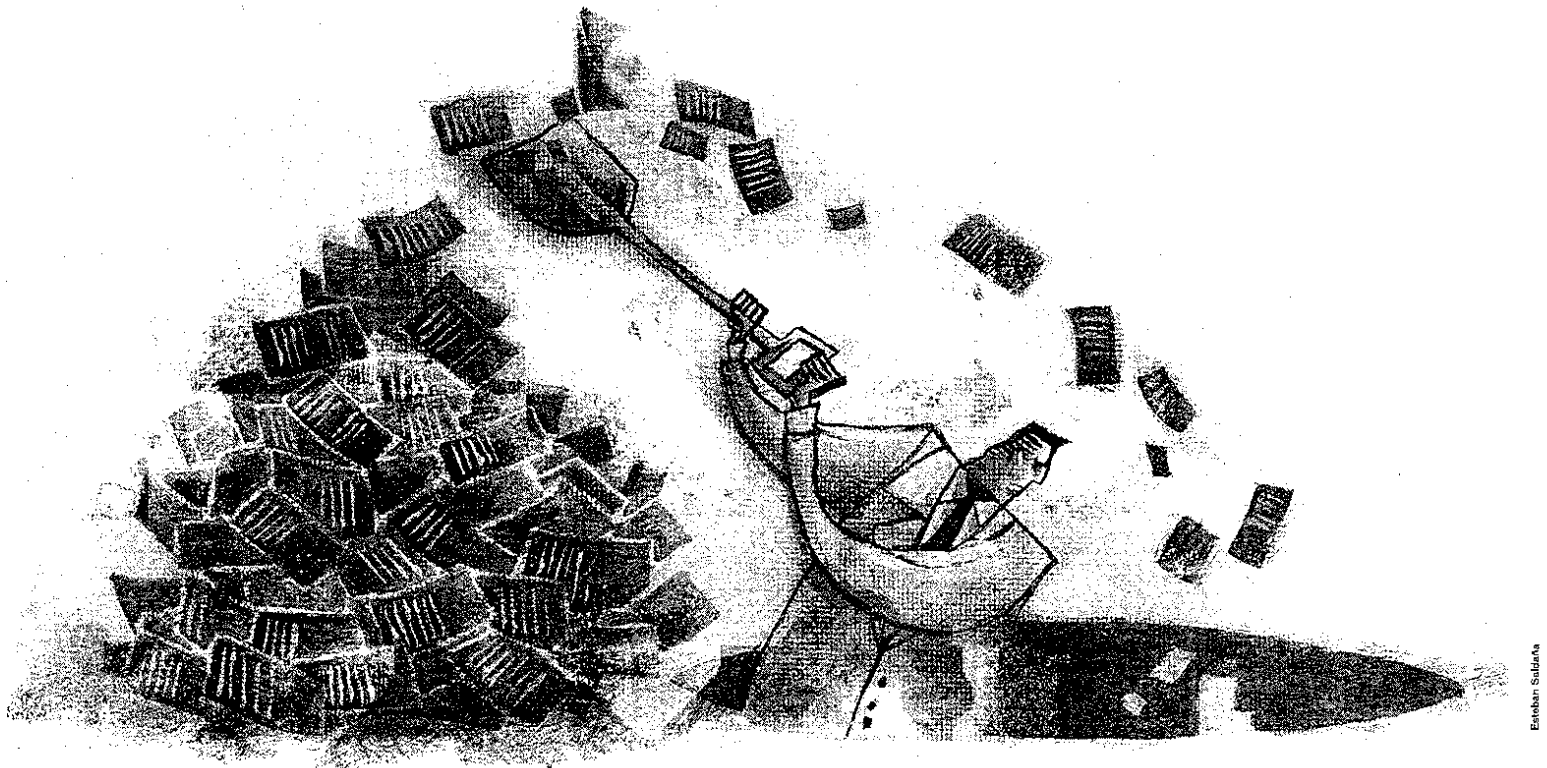


Informe sobre 'La Guerra Sucia'



Torturas, secuestros y asesinatos marcaron la política de represión utilizada por los presidentes Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo. Estados Unidos lo sabía, denuncia la autora. Ahora toca al pueblo mexicano conocerlo.

Kate Doyle

La revelación del proyecto de informe del fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado suscitó conmoción y, a la vez, cierta confusión la semana pasada. El procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, solicitó una investigación. El doctor Ignacio Carrillo Prieto primero dijo no tener conocimiento del proyecto de informe, pero luego aceptó que había sido elaborado por su personal. Entre los críticos hay quienes dicen que el informe está incompleto.

Ahora conviene respirar profundamente, leer el documento y comprender los hechos:

► El proyecto de informe es una obra histórica que apenas se está escribiendo, es decir, un capítulo

de un libro muy largo. Solamente nos ofrece una parte de la historia: una parte importante, pero no es la última palabra.

- Su publicación el día 26 de febrero les dio a todos los mexicanos la oportunidad de leer una obra que, hasta ese momento, tan sólo unas cuantas personas privilegiadas fuera de la Fiscalía habían tenido la oportunidad de conocer.
- Ahora, por vez primera, el presidente Fox ha prometido hacer público el informe final completo en abril, aproximadamente cuatro años después de que se iniciaran los trabajos de investigación.

Si bien el proyecto de informe publicado no es un documento final, pone de manifiesto un hecho muy desagradable: tres presidentes de México -Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y

José López Portillo- mantuvieron una política de represión por casi dos décadas. La utilización de secuestros, torturas y asesinatos para atacar a los opositores del régimen no fue atribuible a unidades militares u oficiales renegados en forma aislada. Fue una práctica oficial.

En el Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive), nos hemos esforzado durante años por hacer públicos esos hechos. Nos corresponde encontrar los documentos gubernamentales y publicarlos. El Archivo ha trabajado en forma intensiva, desde 2000, para exhumar registros estadounidenses y mexicanos que muestren lo que ocurrió realmente durante la Guerra Sucia y compartir esa información con los ciudadanos de ambos países.

Las investigaciones del Archivo indican que Estados Unidos sabía lo que estaba pasando en México durante la Guerra Sucia. Cables enviados a Washington por la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México durante los años setenta se refieren en forma explícita a los esfuerzos del Estado por aplastar tanto a guerrilleros armados como a civiles inocentes.

Por ejemplo, el 19 de abril de 1974, Joseph John Jova, el embajador estadounidense en Méxi-

co, describió en un telegrama enviado a Washington el tipo de tácticas empleadas por las fuerzas de seguridad de Echeverría.

“Hay reportes recurrentes de ‘sospechosos’ cuya única vinculación con actividades antigubernamentales tal vez sea su consanguinidad con guerrilleros buscados; de civiles arrestados inconstitucionalmente por autoridades militares... y de presos torturados mientras estaban detenidos. También ha habido indicios de que el gobierno de México ha matado a algunos presos después de extraerles toda la información que pudieran dar”.

En su comunicación, el embajador estadounidense no estaba repudiando esas prácticas, sino que simplemente las estaba reportando, de manera secreta, al Departamento de Estado. Pese a contar con información de inteligencia precisa sobre los abusos cometidos en materia de derechos humanos, Estados Unidos no tenía intención alguna de presionar a México respecto a ellos. En 1977, el entonces embajador Patrick Lucey calificó la idea de indagar sobre los abusos como “políticamente imposible” y dijo rotundamente que “la diseminación al público de esa información sería perjudicial para el curso futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México”.

La idea misma de que se estaba librando una “guerra sucia” en México aún causa un gran impacto a muchos estadounidenses hoy en día. Pero muchos mexicanos se encontrarán en la misma situación cuando lean los documentos contenidos en el informe del Fiscal Especial.

A diferencia de investigaciones anteriores acerca del papel del gobierno en esos abusos, este informe se nutre de incontables expedientes secretos almacenados en bóvedas de agencias militares, de inteligencia y de la policía mexicanas. Es el primer documento en rastrear el flujo de las órdenes desde el Presidente, el secretario de la Defensa Nacional y de Gobernación hasta los soldados y agentes de seguridad en el campo, así como el flujo de informes que venían de regreso a la Ciudad de México. Las fuentes oficiales no reemplazan los testimonios y relatos de testigos presenciales recopilados a través de los años por organizaciones de derechos humanos: los complementan y los enriquecen.

Actualmente, esos archivos gubernamentales están en manos del fiscal especial, ya que fueron extraídos del Archivo General de la Nación por sus investigadores con el fin de poder escribir el informe. En los días posteriores a la publicación del informe final, será crucial instar al gobierno del presidente Fox a que vuelva a poner esos archivos a disposición del público. De esa manera, sea cual sea el juicio que se dicte a largo plazo acerca de la labor de Carrillo Prieto y sus investigadores, y la calidad de su informe final, el pueblo mexicano tendrá el derecho de consultar los documentos originales por sí mismo.

Todo Estado guarda secretos respecto a sus abusos de poder. Actualmente el gobierno de Estados Unidos está tratando de mantener secreto el uso del espionaje en contra de estadounidenses

“En su comunicación, el embajador estadounidense no estaba repudiando esas prácticas, sino que simplemente las estaba reportando, de manera secreta al Departamento de Estado”.

y su empleo de tortura contra enemigos reales e imaginarios del Estado. Los pueblos de Argentina, Chile y Guatemala, entre muchos otros, han luchado por divulgar las verdaderas acciones de sus gobiernos durante sus propias guerras sucias.

El derecho del pueblo a saber qué es lo que hace su gobierno constituye el fundamento de la democracia en este siglo XXI. No es un derecho sólo de los mexicanos o de los estadounidenses. Es un derecho humano. ■

La autora es reconocida investigadora y directora del Proyecto México del Archivo de Seguridad Nacional, organización no gubernamental con sede en Washington, D.C.

www.nsarchive.org

Traducción: Susan Beth Kapilian.